

# **SOCIEDAD CIVIL, ESFERA PÚBLICA Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: ANDES Y CONO SUR**

---

*Aldo Panfichi*  
(coordinador)

## **Capítulo 12**



Primera edición, 2002

# ANDÉS Y CONO SUR y democratización en América Latina

Alfonso Pastor  
Coordinador

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra  
—incluido el diseño tipográfico y de portada—,  
sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico,  
sin el consentimiento por escrito del editor.

Comentarios y sugerencias: [editor@fce.com.mx](mailto:editor@fce.com.mx)  
Conozca nuestro catálogo: [www.fce.com.mx](http://www.fce.com.mx)

D. R. © 2002, FONDO EDITORIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  
Plaza Francia 1164, Lima 1, Perú

D. R. © 2002, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA  
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.

ISBN 968-16-6762-X

Impreso en México

# SOCIEDAD CIVIL, COOPERACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA PAZ EN COLOMBIA

MAURICIO ROMERO

## INTRODUCCIÓN

La Constitución de 1991 fue considerada como un “tratado de paz” por los sectores políticos que participaron en su elaboración, luego de una década de violencia política y enfrentamientos armados no vistos desde la época de la Violencia, 40 años atrás. Sin embargo, a pesar del pluralismo político logrado en la Asamblea Constituyente que discutió el nuevo texto, el fracaso de las negociaciones con los grupos guerrilleros que no participaron en la asamblea —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— y la ausencia de cambios significativos en los mecanismos de acceso a los espacios de representación pública y su funcionamiento, prolongaron una vez más la crisis política que venía desde finales de la década de 1970. Esos mecanismos continuaron atados al clientelismo y la corrupción, acompañados ahora por una gran fragmentación de las agrupaciones políticas y por una abrumadora influencia de los narcotraficantes en la actividad electoral (E8).<sup>1</sup>

Así, si bien la nueva Constitución avanzó en la democratización de la vida pública y en la apertura de canales de participación ciudadana, la crisis de gobernabilidad casi permanente que siguió a su promulgación puso en la agenda otra negociación entre el gobierno y la guerrilla (Zuluaga, 1999: 321-326). El objetivo era buscar una solución al enfrentamiento armado, con un elemento adicional: reducir el narcotráfico asociado con él. Esa negociación debía restituir los conflictos societales al terreno político, en remplazo de la vía militar, bajo reglas de juego nuevas y concertadas. Esto suponía que los antiguos insurgentes for-

<sup>1</sup> Para este trabajo se realizaron ocho entrevistas entre febrero y marzo del 2000. Aparecen referidas con una E seguida del número de la entrevista: 1) Horacio Arango (Programa por la Paz); 2) Ana Teresa Bernal (Redepaz); 3) Camilo Castellanos (Instituto Legal de Servicios Alternativos); 4) Javier Díaz (Consejo Gremial Nacional, Asociación Nacional de Exportadores); 5) Angelino Garzón (Comisión de Conciliación Nacional); 6) Camilo González (Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad); 7) Yolima Quintero (Asociación de Familiares de Desaparecidos); 8) Luis Sandoval (Redepaz). [N. del E.]

marían parte de ese nuevo orden, lo cual iría más allá de una simple reinserción social en el Estado al que antes habían combatido (Arnson, 1999: 1-28).

Esta ronda de negociaciones iniciada en 1992 ha enfrentado, sin embargo, unas condiciones radicalmente diferentes a las de la década anterior; este trabajo trata sobre las que facilitaron la cooperación y movilización en favor de la paz. Una mirada global permite apreciar el incremento de la movilización en contra de la prolongación del conflicto armado. En la década de 1970 la acción colectiva en busca de la paz representaba 1.6% del total de las luchas cívicas, pasó a 19% durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), aunque descendió a 15.8% durante la administración Gaviria (1990-1994). Esto fue un resultado indirecto de las expectativas despertadas por la nueva Constitución y la desmovilización de los actores armados durante los dos primeros años de este gobierno. Como efecto del escalamiento del conflicto armado desde finales de 1992, las movilizaciones en favor de la paz, por el respeto a los derechos humanos y por la falta de seguridad representaron 22% del total de la protesta cívica en las zonas urbanas, y 28% en el área rural en 1994 (Cinép, 1996: 17).<sup>2</sup>

Hay varias razones para el incremento de la acción colectiva por la paz. Una es la mayor "visibilidad" del conflicto armado colombiano entre los organismos de las Naciones Unidas, las organizaciones internacionales de derechos humanos, las promotoras de desarrollo sostenible y protección ambiental, así como de los gobiernos de la región y de la comunidad europea e internacional. Esa mayor atención llegó acompañada de un cambio en las agendas de las organizaciones de financiamiento y cooperación internacional, lo cual le ha dado un mayor protagonismo a los diversos grupos de la sociedad civil en los diferentes proyectos que financian. La actitud nueva está a tono con una estrategia de democratización distinta a la del estatismo social o al énfasis exclusivo en los mecanismos del mercado.<sup>3</sup> Esa "apertura" internacional favoreció y coincidió con una creciente movilización social por una resolución negociada del enfrentamiento armado, hecho que tampoco se presentaba en la década de 1980.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sin embargo, hay que advertir que varios de los participantes en esas movilizaciones lo hicieron más por motivos estratégicos que con el propósito de impulsar innovaciones y aprendizaje en términos de prácticas y marcos normativos no violentos o de mayor justicia social.

<sup>3</sup> Véase el artículo de Rabotnikof, Riggirozzi y Tussie en este volumen. [N. del E.]

<sup>4</sup> En ese entonces, la visión dominante del conflicto en el país y en el exterior era la de una perspectiva de seguridad estatal, asociada con la Guerra Fría, contexto que entorpecía y estigmatizaba cualquier acción colectiva.

Así, la movilización por la paz en el decenio de 1990 ha marcado un hito, no sólo por la autonomía frente a los diferentes partidos políticos, incluidos los actores armados, sino también por la coincidencia entre sectores que tradicionalmente habían sido opositores en otros ámbitos o en anteriores negociaciones. ¿Cómo surgió esa cooperación y movilización fuera de los partidos tradicionales y los actores armados? ¿Cómo llegaron a acuerdos para la acción colectiva sectores tan diversos y en un ambiente de desconfianza política tan marcado?

### DIVISIONES “NATURALES”, BIPARTIDISMO Y COOPERACIÓN

La respuesta a esas preguntas es relevante porque el contexto no pronosticaba la cooperación. En efecto, la preponderancia de la sociedad política en la vida pública colombiana ha sido tal que algunos autores hablan de una “colonización” de la sociedad civil por las redes políticas liberal-conservadoras (Pécaut, 1999: 226). Ha existido una clara influencia de éstas en las diferentes asociaciones horizontales con capacidad de movilización, sin que se haya dado un efecto similar en el sentido contrario. Esas redes han respondido más a demandas individuales, moldeando lo que se ha denominado una “democracia sin ciudadanos”, la cual no ha creado una idea de ciudadanía común que haga las veces de barrera en contra de las discriminaciones y en defensa de derechos mínimos o, para el caso, que se movilice en una acción conjunta en busca de la paz. Igualmente, la convergencia entre grupos afines al bipartidismo y sectores cercanos a la oposición a los dos partidos históricos también es significativa. El Frente Nacional (1958-1974) y su evolución posterior marcó casi una división “natural” entre el bipartidismo y sus críticos. Ese tutelaje de los espacios asociativos por las redes bipartidistas, en particular de las organizaciones con potencial de oposición como los sindicatos o las Juntas de Acción Comunal (JAC), fue uno de los dispositivos para delinear las inclusiones/exclusiones definidas por el régimen político organizado por los dos partidos.<sup>5</sup> Así, las oportunidades para la interacción en encuentros “suma-positiva” entre estas dos tendencias de la sociedad civil, es decir, donde ambos lados obtuvieran beneficios, fueron escasas hasta el inicio de la década de 1990. Uno de esos momentos fue la Constituyente de 1991.

Hasta la Asamblea Constituyente lo usual fueron las interacciones de “suma-cero”. Esta forma de relación había empezado a cambiar en el

<sup>5</sup> Véase del autor el artículo “Paz, reformas y cambio en la sociedad civil colombiana” en este volumen. [N. del E.]

ámbito municipal y regional durante los paros cívicos de finales del decenio de 1970 y comienzos del de 1980, en protesta por las alzas en las tarifas de los servicios públicos, su cobertura limitada y calidad deficiente, responsabilidades que en ese entonces estaban a cargo del gobierno central. Los efectos de esa centralización administrativa generaron una reacción unificada en las regiones más afectadas, rompiéndose en lo local la barrera para la cooperación y las alianzas entre el bipartidismo y sus opositores. El proceso de paz iniciado por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) contribuyó también a ir diluyendo esa barrera, sobre todo con los intelectuales. El mismo hecho se hizo evidente en la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1986, donde confluyeron liberales, conservadores, comunistas y otros grupos pertenecientes a diversas vertientes de la izquierda. A partir de la Constituyente de 1991, esas relaciones “suma-positiva” pasaron a ser más frecuentes.

¿Cuáles fueron las razones para el incremento de esos intercambios que plantearon cooperación, aprendizaje e innovación? En este texto exploraremos cuatro factores: 1) el cambio dentro de las diferentes iglesias, y en particular la católica, hacia una posición más favorable y activa en relación con una solución negociada del conflicto armado; 2) la elección por voto directo de alcaldes (1987) y gobernadores (1992), lo cual posibilitó iniciativas de paz locales y regionales más autónomas; 3) la decisión de redes de activistas de izquierda, ex guerrilleros, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de desaparecidos, periodistas y actores, organizaciones sindicales, ONG, entre otros, de buscar una salida negociada a la confrontación bélica, y 4) la reacción de individuos y grupos sociales afectados por el secuestro y la extorsión, que optaron por pronunciarse y movilizarse públicamente en contra de esos hechos. Si bien cada uno de estos grupos tuvo razones específicas, el rechazo a la “guerra sucia” rural y urbana y al escalamiento de las acciones bélicas como medio para resolver un conflicto político fue un común denominador (E5).

La influencia de estos cuatro factores facilitó los acercamientos, debates y la acción colectiva en la búsqueda de la paz, aunque la coyuntura que aceleró los hechos y abrió oportunidades fue la declaración de “guerra integral” en contra de los grupos alzados en armas en noviembre de 1992. En efecto, el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994) prometió someter la guerrilla a la ley en 18 meses (Pardo, 1996: 353-387). La prohibición presidencial de cualquier contacto, mediación o diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad civil y los insurgentes, o la posibilidad de entablar diálogos regionales entre aquéllos y sectores interesados en la paz desencadenó primero desconcierto, y luego una

gran oposición. Hubo obispos que plantearon el “derecho a la paz de los colombianos” y llamaron a una “desobediencia civil” frente a la política presidencial (E3). En este contexto surgieron las posibilidades para esa dinámica de confluencia, aprendizaje e innovación.

### MOVIMIENTO POR LA VIDA Y RENOVACIÓN DISCURSIVA

La Compañía de Jesús fue uno de los grupos pioneros dentro de la sociedad civil que se planteó como objetivo primordial crear condiciones para la consecución de la paz. Hasta mediados de 1985 éste era un propósito liderado por la sociedad política, al cual el presidente conservador Belisario Betancur le dio un impulso sustancial —a diferencia de las dos administraciones liberales que le antecedieron—. Los jesuitas apoyaron este proceso, aunque “el objetivo era disminuir la violencia, que estaba adquiriendo proporciones de animal grande, antes que la paz” (E1). Vendieron “La Lechuga” —reliquia colonial de oro macizo y cubierta con piedras preciosas— al Banco de la República en 1985, y el producto de la transacción sirvió para crear un fondo cuyos réditos han financiado el Programa por la Paz, fundado en 1987. Durante sus 10 primeros años, el programa financió cerca de 1 000 proyectos para fortalecer a la sociedad civil, en particular en las zonas de conflicto y áreas marginales (E1). Esta intervención incluyó proyectos productivos y actividades de educación y reflexión con grupos pobres o marginados, encaminados al fortalecimiento de la noción de sujetos colectivos y su reconocimiento como agentes portadores de derechos. Según su primer director, el jesuita Horacio Arango, las diferentes comunidades mostraron una gran capacidad para dar respuestas coyunturales, pero una gran dificultad para articular propuestas mayores. Al respecto, Arango indica que “hay un interés partidista muy hostil, desde la izquierda o desde el bipartidismo, hacia esa articulación”. Ese excesivo faccionalismo de la vida pública, la competencia resultante por el control de los recursos estatales y los mecanismos de decisión, y la dificultad para la cooperación, tienen como anverso un asedio permanente desde el ámbito político a la autonomía de la vida asociativa.

Una de las iniciativas financiadas por el Programa por la Paz desde finales de la década de 1980 fue la del Movimiento por la Vida, antecesor de uno de los principales colectivos que conformaron Redepaz en el decenio de 1990, una de las mayores impulsoras de las diversas manifestaciones colectivas para poner un alto a la confrontación armada (E2). La cooperación entre estas redes de activistas, el Programa por la Paz y

el Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular) —otra institución jesuita— es una experiencia de asociación notable. El Movimiento por la Vida se formó a consecuencia de los dramáticos acontecimientos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por el movimiento guerrillero M-19 en noviembre de 1985, y la reacción del ejército para contrarrestar el acto. La muerte de aproximadamente 110 personas a 200 metros de la casa presidencial, incluida la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el comando guerrillero y empleados de la institución, causó gran conmoción pública, en especial dentro de los grupos interesados en el “diálogo nacional” propuesto por la insurgencia armada al gobierno de Betancur.

Grupos de mujeres que apoyaban un diálogo entre gobierno y guerrilla —como Mujeres por la Democracia, Casa de la Mujer y Mujeres del M-19— organizaron un año después un concierto para recordar el hecho, al cual llamaron “concierto con flores para la vida y el amor” y donde se proclamó un manifiesto en defensa de la vida y contra la muerte. En el acto participaron artistas internacionales y se celebró frente al palacio en ruinas (E2).<sup>6</sup> Además de los grupos de mujeres, el Movimiento por la Vida también incluyó a periodistas, actores y artistas —autodenominados “locos por la vida”—, quienes se expresaron lúdicamente en varios lugares públicos de la capital, desafiando los estrictos controles de las autoridades y el miedo provocado por el ambiente político belicoso. También se organizaron “colectivos por la vida” en Pasto, Cali y Medellín, donde la participación de grupos de mujeres fue igualmente destacada. Un hecho sobresaliente en Bogotá fue la proliferación de *grafitti* en los muros y paredes del centro y algunas de las principales vías, aludiendo con humor y sarcasmo a la violencia y a los excesos de autoridad: “Do... Re... Mi... edo...”, decía uno de esos *grafitti*.

La dinámica del movimiento viró hacia la educación para la convivencia dirigida a jóvenes y niños, experiencia que desembocó en la organización anual de una semana por la paz, la cual se ha realizado sin interrupción desde 1987 con el apoyo del Programa por la Paz. Durante la primera semana, en septiembre de 1987, se lanzó un “manifiesto de sueños infantiles” y se les pidió a los niños reflexionar sobre el país “que querían y que soñaban”. A través de talleres de pintura y narrativa los niños expresaron sus expectativas a lo largo de la semana en los centros educativos. La figura pictórica que más se repitió fue la de “un soldado y un guerrillero dándose la mano” (E2). A la clausura asistieron aproximadamente 50 000 niños, provenientes en su gran mayoría de colegios

<sup>6</sup> Véase el artículo de María Emma Wills en este mismo volumen. [N. del E.]



oficiales y religiosos. La organización de la semana se hizo a partir de “redes de amigos y la gran colaboración de los padres de familia y los rectores de los colegios”, aunque con una gran hostilidad de parte de las autoridades políticas de la capital, quienes no aprobaron la realización del acto y ordenaron a la policía el desalojo de la plaza, orden que finalmente no se cumplió (E2).

Para los jóvenes se organizó una “consulta ciudadana por la paz”: tenían que responder la pregunta: “¿Usted cómo cree que se construye la paz?” Además de talleres de discusión en los colegios, otros grupos recorrieron los principales centros de la capital entrevistando y discutiendo sobre el tema con otros adolescentes. A pesar de los propósitos pedagógicos y a favor de la convivencia, la hostilidad de la administración conservadora del nuevo alcalde Andrés Pastrana era patente. Tres jóvenes fueron arrestados por “alterar el orden público”, y fueron liberados más tarde tras las gestiones del entonces procurador, el liberal Horacio Serpa.

Si bien esas actividades no tuvieron mayor resonancia en los medios, sí consolidaron un “contrapúblico” (Fraser, 1997) o una red comunicativa y de prácticas en competencia con las de la esfera oficial o de los grupos radicalizados, a los cuales les disputaban la creación de un marco de interpretación y de sentido de la conflictiva realidad del momento. En efecto, uno de los aspectos más significativos de estas movilizaciones fue la innovación en el lenguaje y la intención de no polarizar y, más bien, crear mediaciones simbólicas entre las partes enfrentadas; un ejemplo fue la decisión explícita de no reproducir la división entre lo popular y lo no popular, pues ello aludía a los imaginarios “clasistas” que dieron origen al conflicto armado (E2). Se quería congregarse a “todo el país, sin exclusiones”, y el lenguaje reflejaba ese esfuerzo. Sin embargo, esa intención por “desarmar el lenguaje” no significaba la negación de los conflictos, sino un llamado a enfrentarlos y resolverlos pacíficamente (E2).

A pesar de ese objetivo, esta posición enfrentó severas críticas. Fue atacada desde la izquierda por conciliadora, derrotista y por borrar las exclusiones sociales y políticas; y fue mirada con indiferencia por el grupo dirigente liberal-conservador, aún confiado en derrotar militarmente a la guerrilla. Con todo, el experimento del Movimiento por la Vida fue un intento por crear un marco discursivo común para aquellos ajenos a la confrontación armada y convencidos de una salida negociada al conflicto. Igualmente, las iniciativas que desarrolló ese colectivo a finales de la década de 1980 prefiguraron varias de las acciones desarrolladas por Redepaz, UNICEF y Fundación País Libre, casi 10 años después. Esta tendencia de la sociedad civil resurgiría con fuerza luego de la

declaración de “guerra integral” a la guerrilla hecha por la administración Gaviria (1990-1994) a finales de 1992, pero esta vez con más simpatizantes, con el apoyo de diversos sectores sociales y con aliados más poderosos. Esto supuso superar recelos y desconfianzas, crear puentes entre grupos que hasta el momento tenían poco en común y, por lo tanto, innovar y aprender. Como todo camino nuevo, también incluyó riesgos y equivocaciones.

#### LA DÉCADA DE 1990: PAZ Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

Durante la década de 1990 el enfrentamiento armado tuvo un escalamiento sin precedentes, a pesar de las expectativas de paz y reconciliación originadas por la aprobación de una nueva Constitución en 1991. De igual forma, junto al incremento de las acciones armadas ocurrió una significativa confluencia de diferentes grupos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para apoyar la búsqueda de una negociación del conflicto. Ante la política de guerra integral del presidente Gaviria se propuso una de “paz integral” desde la sociedad civil (E8). La dimensión de esa confluencia y movilización era un hecho nuevo frente a las negociaciones de la década pasada. Con excepción de las acciones colectivas regionales para buscar acuerdos sociales y reducir la violencia política —como las de los trabajadores del banano en Urabá—, en el decenio de 1980 diversos grupos civiles participaron en las negociaciones de paz siguiendo una invitación de los grupos guerrilleros —antes que por propia iniciativa—. Esta vez la búsqueda de la paz representaba una postura definida a favor de una solución política pactada, hecho sin antecedentes en las negociaciones anteriores (E6).

En efecto, a finales de 1992 se constituyó una red de iniciativas por la paz, compuesta por 12 organizaciones de diferente naturaleza.<sup>7</sup> El objetivo era articular las experiencias de gestión de paz que estaban surgiendo en todo el territorio, y darle fuerza y resonancia a sus demandas; “hacer un mar de muchos ríos”, según el director del Programa por la Paz (E1). La dinámica de la red culminó en el primer encuentro de “iniciativas ciudadanas contra la guerra y por la paz”, realizado en Bogotá a finales de 1993, y con la participación de más de 300 personas prove-

<sup>7</sup> Centros de educación popular como Ismac (Instituto Sindical María Cano); organizaciones de los jesuitas como Cinep, el Programa por la Paz y la Fundación Social; ONG de derechos humanos como el Centro Jurídico Colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas; y experiencias regionales como la Mesa de Trabajo por la Vida de Medellín, Derrotemos la Guerra de Santander, y La Iniciativa por la Vida de Bogotá, entre otras.

nientes de 20 regiones del país. El encuentro dio origen a Redepaz, cuyo principal objetivo fue definido como “el de derrotar la guerra”, según el obispo Leonardo Gómez Serna, destacado impulsor de la iniciativa.

El grupo inicial, en el que habían tenido una importante influencia ex guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19), fue luego reforzado por asociaciones de ex guerrilleros, ahora “reinsertados” a la vida civil, como los de la Corriente de Renovación Socialista, provenientes del ELN. La red debía propender a la propia representación de la sociedad civil, y enfatizar las actividades educativas y de carácter simbólico en contra de la guerra y por la paz (Villarraga, 1998: 72-82). Para los antiguos ex combatientes, la generalización de la violencia había llevado a una situación en la que “las armas perdieron su brillo”, y se necesitaba un imaginario de cambio diferente al de la lucha armada (Cinep, 1996: 32).

Los debates suscitados por la definición de la agenda a seguir dentro de la red fueron reveladores. Su propósito era congregarse antes que separarse, aunque la exclusión de los grupos guerrilleros no fue bien acogida por sectores con alguna afinidad con éstos. Estas diferencias se ahondaron con la discusión sobre los derechos humanos y las violaciones hechas por agentes del Estado, y ante el énfasis puesto en las instituciones encargadas de velar por su defensa y de respetar la legislación internacional, todo lo cual no tomaba en cuenta las violaciones cometidas por las guerrillas. Un consenso dentro de la red coincidió en hacer visibles también estas violaciones. La tensión aumentó con la discusión sobre el paramilitarismo y su origen. Se consideró que éste no podía ser visto sólo como una “política de Estado”, sino que también se alimentaba de los efectos surgidos de la extorsión y el secuestro cometidos por la guerrilla (E2).

Otro punto candente de discusión fue el del alcance de la convocatoria al país. En efecto, se propuso un cambio de actitud hacia los empresarios y militares, y se consideró que la paz era imposible sin el concurso de ellos, abriéndose canales de acercamiento e intercambio. En suma, se inició un proceso de innovación y aprendizaje al tratar de moldear una propuesta civilista, y al mismo tiempo intentar transgredir las barreras casi “naturales” entre las dos grandes tendencias de la sociedad civil creadas por el Frente Nacional y su evolución posterior. La búsqueda de una interacción suma-positiva entre sectores sociales que se consideraban ubicados en orillas políticas e ideológicas opuestas, y aun sin un claro reconocimiento mutuo como actores legítimos, fue un paso más hacia la redefinición de los antagonismos característicos de la herencia del Frente Nacional.

La decisión del presidente Gaviria (1990-1994) de llevar por la fuerza a la mesa de negociación a la guerrilla, o de derrotarla, contradecía el

artículo 22 de la nueva Constitución, el cual expresaba que la “paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (Comisión de Conciliación Nacional *et al.*, 1998: 53). Redepaz inició una ferviente campaña nacional para hacer efectivo ese derecho en 1994 y 1995, promoviendo consultas ciudadanas, encuentros y reuniones con el fin de impulsar la iniciativa popular legislativa y presionar por la reglamentación de ese artículo constitucional. Asimismo, en asociación con la Iglesia menonita, se trabajó con jóvenes en edad de reclutamiento para hacer efectiva la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Igualmente, Redepaz propuso la creación de consejos de paz regionales y locales, y la ampliación del marco jurídico con mecanismos de conciliación y mediación (Villarraga, 1998: 75-76). En el plano legal, la creación del Consejo Nacional de Paz por decreto presidencial en 1998 fue un logro tardío de esa campaña, aunque su inoperancia en la práctica describe las limitaciones de la sociedad civil colombiana para influir en el poder político, o mejor, en el autismo social de éste.

Gobernadores y alcaldes, ahora elegidos por voto directo, acogieron las diferentes iniciativas con variado entusiasmo, aunque la inclemencia de los efectos del conflicto armado sobre la población civil le abrió al tema de la paz un lugar central en las diferentes agendas regionales y locales. El Consenso de Apartadó, en la zona bananera del noroeste del país, durante la alcaldía de Gloria Cuartas (1995-1997), fue un esfuerzo fallido por construir la convivencia en medio de una intensa disputa armada. Otro caso significativo fue el de la Consulta por la Paz en el municipio de Aguachica, zona agroindustrial y ganadera del sur del departamento del Cesar, en el nororiente del país, y eje de un enconado enfrentamiento social por derechos sindicales y por apoyo a la economía campesina, y entre la guerrilla (principalmente el ELN) y las fuerzas bipartidistas. La consulta se realizó a mediados de 1995, con el ánimo de “derrotar a los violentos”, utilizando una de las nuevas herramientas constitucionales sobre participación popular. La convocatoria contó con el apoyo de la Iglesia católica —cuyo párroco la apoyó desde el púlpito—, la cámara de comercio, el alcalde saliente y el candidato derrotado por el alcalde elegido, Fernando Rincón (1995-1997), ex guerrillero del M-19. Éste fue el principal impulsor de la consulta, y su candidatura triunfó gracias al apoyo de la fracción mayoritaria del liberalismo en el municipio (Romero [1997]).

El propósito era consolidar un “territorio de paz” a partir del plebiscito popular. Sin embargo, el desarrollo de la consulta puso sobre el tapete los riesgos de su realización. Los votos depositados no alcanzaron el mínimo legal para convertirse en “mandato”, y el tono antiguerrillero de

algunos de los convocantes, lo mismo que la consolidación posterior de los paramilitares como fuerza dominante en el municipio, terminaron por polarizar aún más la situación. Los críticos de la consulta indicaron que el diseño del *tarjetón* era maniqueísta. La pregunta pidió marcar una de dos opciones: “Sí a la guerra” o “Sí a la paz”, y aquéllos afirmaron que con esa formulación era obvio que nadie iba a votar por la guerra (Romero [1997]).

Además, con la posterior evolución política del municipio quedaron planteados los riesgos de un ejercicio ciudadano como el de Aguachica, donde parece que no fue suficiente hacer un llamado por la paz, si éste no iba acompañado de una demanda por la democracia y la justicia social. Igualmente, la experiencia indicó que el contexto nacional de estancamiento o consolidación de las negociaciones con la guerrilla influiría en el sentido y trayectoria final que tomara la iniciativa. Tal y como se desarrolló, en un ambiente de estancamiento de tales negociaciones, la consulta se deslizó hacia un terreno “gris” donde la confianza, la cooperación y las posibilidades de reconciliación no fueron las más beneficiadas. La guerrilla consideró que la consulta se había organizado en contra de ella, el alcalde que la promovió fue acusado —sin pruebas— de apoyar a los paramilitares, y la población siguió padeciendo los efectos de la violencia.

Con todo, para mediados de 1995 los esfuerzos de paz empezaron a tener unas dimensiones significativas nacionales, así no fueran unificados. La jerarquía de la Iglesia católica organizó la Comisión de Conciliación Nacional, con la intención de mediar y acercar a las partes enfrentadas y estructurar una política nacional permanente de paz (Comisión de Conciliación Nacional *et al.*, 1998: 51). Además de los obispos, en ella participaron políticos, líderes sindicales, ex militares, periodistas y empresarios. Si bien el cambio de actitud de los obispos no fue resultado de una reformulación del papel de la Iglesia en la vida nacional, sino de los efectos de la guerra en la población, el nombramiento del cardenal Alfonso López Trujillo, figura conservadora y dominante dentro de la jerarquía, a una posición dentro de la burocracia del Vaticano, permitió oír nuevas voces y propuestas de obispos más cercanos a posiciones progresistas (E1). Este hecho contrastó con la reticente disposición de los obispos hacia las negociaciones de paz durante la década de 1980. Por su lado, las confederaciones obreras y los sindicatos nacionales, las ONG de derechos humanos y los activistas de izquierda, organizaron el Comité de Búsqueda por la Paz para contribuir a ésta desde una “perspectiva popular” (Villarraga, 1998: 76). En unión con Redepaz, este comité realizó seminarios sobre “paz integral y sociedad civil” en las principales

capitales departamentales, con participación de trabajadores, indígenas, grupos de mujeres, de jóvenes y ambientalistas, y con la intención de “construir un gran movimiento social por la paz”.

Asimismo, la Fundación Social impulsó dentro del sector privado la discusión de la conveniencia de una solución negociada al conflicto armado, lo cual tuvo como resultado inmediato la organización del grupo Empresarios por la Paz, compuesto por los principales gremios patronales.<sup>8</sup> El hecho representaba una posición radicalmente opuesta a la asumida por el empresariado en las negociaciones de la década anterior, cuando formaron una sola voz con la oposición militar al proceso de paz. La nueva actitud también se notó en el rechazo al impuesto de guerra propuesto por la administración Samper (1994-1998) y en la crítica a la ineficiencia del gasto militar (Cinep, 1996: 17).

Igualmente, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, dependiente de la Presidencia, organizó con Ecopetrol —la empresa petrolera estatal— y la Unión Sindical Obrera (USO) un plan conjunto para discutir la política energética y su relación con un eventual proceso de paz, colaboración que llevó a la Asamblea por la Paz en 1996. De este hecho surgió la idea de convocar a la constitución de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la cual se realizó en 1998 con cerca de 4 000 delegados de todo el país, donde confluyó una impresionante variedad de grupos, experiencias y propuestas locales y regionales para “construir la paz con democracia y justicia social”. El acto tuvo un apoyo decidido de la Fundación Social, de otras entidades de la Iglesia católica y de organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el PNUD, y fue instalado por Danielle Mitterrand, viuda del ex presidente francés.

#### EL MANDATO CIUDADANO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD

Para mediados de la década de 1990 era un hecho el activismo de diferentes grupos de la sociedad civil para abrir espacios y mecanismos de participación. Éstos buscaban presionar al gobierno y a los actores armados para que llegaran a una solución del conflicto, o al menos que respetaran a la población civil. Mientras tanto, crecía la vinculación a la guerra de menores de edad, aumentaba el número de secuestros y de desapariciones forzadas de civiles, se ampliaba la dimensión de la población desplazada, se incrementaban los lisiados por heridas de guerra, se multi-

<sup>8</sup> Entre otras: Asociación Nacional de Industriales, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Asociación Nacional de Exportadores, Sociedad de Agricultores de Colombia, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales.

plicaba la eliminación de presuntos simpatizantes no armados de uno u otro bando, al igual que las bajas a consecuencia de los enfrentamientos directos. El nuevo marco constitucional sobre consultas ciudadanas ofrecía oportunidades para hacer oír la voz del “constituyente primario” de manera civilista. Se realizó un primer ensayo con el Mandato de los Niños y las Niñas por la Paz y sus Derechos en octubre de 1996, ya que este grupo es uno de los primeros afectados en las guerras, y uno de los menos atendidos. Con el apoyo de UNICEF y la Registraduría Nacional, Redepaz y otras ONG —como Semilleros de Medellín— organizaron una consulta sobre los derechos de los infantes en los colegios de 300 municipios; contaron con la participación de 2 700 000 niños y niñas. El derecho a la vida y el derecho a la paz, entre otros diez derechos, obtuvieron la mayoría de votos (E2).

Entre tanto, la reacción a otro drama provocado por la guerra tomaba su impulso propio. Para finales de 1996, la Fundación País Libre organizó cinco marchas contra el secuestro en cinco ciudades —Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencia y Valledupar—, lográndose una movilización que rompió las expectativas de sus impulsores. En Bogotá se movilizaron cerca de 50 000 personas bajo la consigna “por el país que queremos, no al secuestro”. El propósito inicial de la fundación era apoyar a las familias de los secuestrados, y a éstos una vez liberados. En la primera parte de la década de 1990, País Libre recolectó más de un millón de firmas para apoyar un proyecto de ley antisequestro, y apoyó el pago de recompensas por el Estado para quienes dieran a las autoridades información que condujese a la liberación de secuestrados o a la captura de los implicados en estos hechos. La cabeza visible de la fundación es el periodista Francisco Santos, secuestrado durante ocho meses por el traficante de drogas Pablo Escobar a finales del decenio de 1980, y directivo del periódico *El Tiempo*, el diario de mayor circulación en el país. La fundación también recibe apoyo del sector privado en general, y de ganaderos y empresarios agrícolas en particular, los grupos sociales más afectados por el secuestro y la extorsión de la guerrilla y la delincuencia común (Fundación País Libre, archivo de prensa).

Los orígenes y objetivos de Redepaz y País Libre no permitían predecir su confluencia y cooperación, aunque cada uno, a su manera, representaba formas diferentes de experimentar el mismo fenómeno —una confrontación armada— y sus efectos en individuos y grupos concretos. La violencia del conflicto los igualó y los puso en el mismo terreno: demandar derechos y garantías comunes, es decir, para todos, hecho que contrastaba con la evidente desigualdad social de la que partían. La forma como llegaron a un acuerdo para la acción unificada supuso la inexisten-

cia de la protección estatal, la cual habría que redefinir y reconstruir una vez superado el enfrentamiento. En efecto, la invitación de País Libre a Redepaz para participar en las marchas de diciembre de 1996 fue aceptada, siempre y cuando a la protesta contra el secuestro se le agregara otra contra la desaparición forzada. País Libre aceptó y a su causa, “que era un dardo hacia la guerrilla, añadió la nueva contra la desaparición, que era un dardo hacia el Estado” (Guerrero, 1998: 124). Estaba plantado el terreno para una causa común.

El hecho tenía un significado más allá de la simple suma de esfuerzos. Como cada uno de los grupos representaba a las tendencias en las que históricamente había estado dividida la sociedad civil colombiana, la cooperación entre ellas abría posibilidades de recomponer esa separación “casi natural”. Algo similar había ocurrido con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1986, o durante la Asamblea Constituyente en 1991. Cada vez que esa división histórica se ponía en entredicho, aumentaban las posibilidades de crear un campo para el desarrollo de una ciudadanía más inclusiva, ampliar el número de los sujetos portadores de derechos, y que sectores que se desconocían mutuamente se reconocieran entre sí. Esto fue claro en el caso de las marchas contra el secuestro de diciembre de 1996. Allí se encontraron por primera vez en la calle los familiares de los desaparecidos, codo con codo, agitando pancartas con los familiares de los secuestrados (Guerrero, 1998: 124).

Este primer acercamiento entre sectores tan diversos dejó perplejos a muchos. Era nada menos que proyectar una imagen menos clasista de la sociedad para promover una centrada alrededor de una causa común, en este caso el derecho a la vida y a la libertad. Semanas después se llegó a un acuerdo entre UNICEF, Redepaz y País Libre para realizar una consulta que tuviera la fuerza de un mandato del “Constituyente primario”. Había que aprovechar las elecciones locales y regionales de octubre de 1997, para lo cual se debería contar con el apoyo del gobierno, quien costearía la consulta. A la idea del Mandato por la Paz y la Vida se le agregó la palabra Libertad, y la propuesta del mandato ciudadano empezó a tomar forma. La dinámica surgida de la organización de la consulta permitió nuevas interacciones entre personas y sectores que rara vez tenían oportunidad de compartir una causa común, como los miembros del Consejo Gremial y los representantes de las centrales obreras, o miembros de organizaciones de derechos humanos con representantes de grupos económicos. “Debemos superar el esquema de estar siempre los mismos con las mismas”, explicó la vocero de Redepaz (Guerrero, 1998: 126-129).



Las reacciones de los actores armados frente a la *troica* fueron variadas. Para el jefe máximo de las FARC, “los partidos y los tres poderes [...] ahora, en las proximidades de una campaña electoral, quieren tapar el sol con las manos, proponiendo el voto por la paz” (Guerrero, 1998: 126). El ELN fue más receptivo y reconoció el hecho como un acto de soberanía popular; los paramilitares mostraron interés en participar y apoyaron públicamente la consulta, y los militares vieron la oportunidad para llevar a cabo una “operación psicológica” (E2). Como reconociera un dirigente de la CUT, la convocatoria fue abierta y sirvió a agendas diferentes, y por eso tuvo “lecturas distintas” (*El Tiempo*, 26 de septiembre de 1997).

El proceso, que culminó con cerca de 10 millones de votos apoyando el mandato ciudadano, fue un ejercicio de pedagogía política sin antecedentes. Igual sucedió con la mezcla entre técnicas de comunicación masiva y la acción colectiva. Por ejemplo, el uso de Internet para informar y promover las movilizaciones de colombianos en el exterior fue una innovación importante (E8). En el exterior, el voto por el mandato fue casi tres veces mayor que el conseguido por los candidatos a la presidencia juntos, seis meses después. Con todo, no faltaron quienes acusaron a unos y otros de colaborar con la extrema izquierda o con la extrema derecha, según el caso (Pontón, 1998: 136).

Sin embargo, para el presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, como mínimo, el mandato “vinculó a la gente a la discusión sobre la paz, y ese elemento es positivo” (*El Tiempo*, 26 de septiembre de 1997). Para el representante de los exportadores, las discusiones alrededor de la paz permitieron conocer otras facetas más propositivas de los líderes sociales, diferentes a las capacidades para organizar luchas reivindicativas, y esto fue importante (E4). Para la vocero de Redepaz, además de influir en la agenda de discusión pública, se logró la aplicación de la prohibición legal de la participación de menores de 18 años en la guerra, la legalización de la vinculación de civiles en actividades de inteligencia y vigilancia a través de las cooperativas de seguridad Convivir, y se propició un acercamiento entre miembros de la sociedad civil y el ELN. De aquí surgió el encuentro en Maguncia, Alemania, patrocinado por el episcopado católico alemán y donde se reunieron 40 representantes de organizaciones gremiales, sociales y de la Iglesia, y otras personalidades. Éstos acordaron realizar en el futuro una “convención nacional” entre la sociedad civil y el ELN en territorio colombiano, la cual se frustró con el cambio de gobierno en 1998.

En suma, la experiencia del mandato puso en evidencia la diversidad y número de iniciativas en busca de la paz, las cuales no sólo represen-

taban esfuerzos diferentes sino perspectivas, ritmos y aliados distintos en un eventual proceso de negociación. Mientras Redepaz ponía énfasis en una propuesta civilista, en defensa de la población civil no vinculada al conflicto armado, por la aplicación del derecho internacional humanitario, y buscaba un alto en la guerra y pedía la negociación inmediata entre el gobierno y la guerrilla, las propuestas provenientes de las organizaciones sociales tenían otras prioridades. En efecto, sin estar en desacuerdo con los objetivos anteriores, anteponían los de justicia y concertación social. Igualmente, País Libre tenía la denuncia del secuestro como su prioridad, aunque también estaba interesado en un cese de la guerra. En la práctica, estos matices y diferencias se reflejaban en los escenarios, las convocatorias y los aliados. Sin embargo, el grado de cooperación logrado entre sectores tan disímiles fue notable durante la convocatoria del mandato, dados los orígenes y propósitos tan diversos. Por un breve tiempo, algunas de esas divisiones históricas parecieron desvanecerse y atisbos de un posible “nuevo país” dejaron ver sus rasgos.

#### NO AL SECUESTRO, LA DESAPARICIÓN FORZADA Y EL REGISTRO EN LOS MEDIOS

El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) inició su mandato con la decisión de consolidar un proceso de negociación política con las FARC. Por el contrario, los avances logrados con el ELN por el gobierno anterior no fueron considerados, decisión a la cual este grupo respondió con represalias sobre la población civil.<sup>9</sup> El año 1999 no había comenzado como un año normal. A finales de enero, tres miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín fueron secuestrados por paramilitares acusados de “auxiliadores de la guerrilla”, y su jefe, Carlos Castaño, lanzó amenazas contra las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, defendió a esas organizaciones y manifestó que “los líderes de derechos humanos son constructores de paz” (*El Tiempo*, 2 de febrero de 1999). Aunque los secuestrados del IPC fueron liberados, tuvieron que abandonar el país, y fue asesinada la coordinadora de Redepaz en el departamento del Cesar a mediados de ese año. La senadora liberal Piedad Córdoba,

<sup>9</sup> Una secuencia de hechos resultaron especialmente traumáticos. El secuestro de un avión comercial con 46 pasajeros a bordo en abril de 1999, el secuestro de más de 100 feligreses que asistían a misa en una iglesia de la ciudad de Cali a finales de mayo del mismo año, y el secuestro de más de 10 miembros de un club privado de pesca y recreo en la ciudad de Barranquilla el mismo fin de semana.

enérgica vocera por el respeto a los derechos humanos, también fue secuestrada por los paramilitares, y aunque fue liberada a los pocos días, tuvo también que salir al exilio.

País Libre se movilizó para organizar marchas en contra del secuestro en todo el país, en asociación con los gremios empresariales. Redepaz, la Comisión Colombiana de Juristas, Asfades (Asociación de Familiares de Desaparecidos) y otras ONG también se unieron a la campaña, pidiendo la inclusión de la desaparición forzada. Estas últimas estaban empeñadas en la tipificación de ésta como delito, lo cual no se había podido lograr, no obstante las continuas solicitudes a los diferentes gobiernos desde la década pasada. La ausencia de estatus jurídico para este delito implicaba problemas legales para sus familiares, además de la imposibilidad de adelantar alguna acción penal en contra de sus ejecutores, generalmente agentes del Estado (E7).

Al igual que durante la organización del Mandato Ciudadano, la ampliación de la consigna inicial, esta vez en contra del secuestro, y la inclusión de la desaparición forzada, creó un terreno de cooperación y un frente colectivo para la defensa de un derecho común, esta vez el de la libertad personal. También se buscó sensibilizar a la sociedad acerca de la privación de la libertad e involucrarla pacíficamente en su defensa (E7). Miles de personas y familias de diferente condición social realizaron marchas masivas en contra del secuestro y la desaparición forzada en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Aunque no se guardó el “equilibrio” al momento de hacer las declaraciones ante la televisión, la radio y la prensa escrita, los medios pusieron énfasis en el secuestro olvidándose de la desaparición (E7).

A la par que se organizaban las marchas, sus impulsores iniciaron una campaña de cabildeo en el Congreso para la elaboración del proyecto de ley tipificando la desaparición forzada, y luego para presionar por su aprobación. Igualmente, se mantuvo informado al cuerpo diplomático, en particular a los embajadores de la Comunidad Europea, sobre el avance del proyecto. En esto, la oficina delegada para los derechos humanos de la Naciones Unidas en Colombia ofreció un apoyo definitivo.

Para el cierre de las marchas se planeó una gran movilización nacional en octubre. Para ese entonces los publicistas asociados a País Libre habían convertido la campaña ciudadana por la libertad, contra el secuestro y la desaparición forzada en un estruendoso “¡No Más!”, el cual redujo el sentido de la acción en los medios al solo rechazo del secuestro y, en el contexto en el que se realizó, a convertir la marcha en una condena a la guerrilla —y no a sus acciones—, lo que debilitaba el proceso de paz. Unos cuatro millones de personas marcharon en todo el país para expre-

sar su rechazo al secuestro y a la violencia, hecho que fue convertido por los medios en una “cuenta de cobro” contra la guerrilla. En opinión de la vocera de Redepaz, “el ¡No Más! ya era otra cosa. La marcha no estaba pensada en contra de ninguno de los actores armados ni para polarizar aún más el ambiente” (E2).

Los resultados de la gran marcha de octubre dejaron un sabor amargo a Redepaz y sus asociados. Los más descontentos llegaron a sostener que los créditos del esfuerzo “se los había robado la oligarquía”, representada por la familia Santos, propietaria del periódico *El Tiempo*, afirmación que no fue bien recibida en País Libre. Además, el Mandato Ciudadano había dejado de existir como un hecho que generó una convergencia amplia de diferentes grupos y pasó a convertirse en una ONG más, dirigida por un sector de esa convergencia. Igualmente, alrededor del “¡No Más!” se organizó otra ONG apoyada por empresarios y gremios económicos, para quienes el objetivo primordial era parar la guerra, y con esto el secuestro, pero quienes no tenían ningún propósito de transformación social, punto importante para Redepaz (E8). Si bien el nuevo milenio encontró distanciados a los principales actores de las movilizaciones por la paz, quedaron los puentes y las enseñanzas para futuras acciones.

#### EL PDPMM: DESARROLLO Y PAZ “EN CALIENTE”

Una de las iniciativas más innovadoras en la segunda parte de la década de 1990 fue el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), impulsado por el jesuita Francisco de Roux, el Cinep y la Pastoral Social de Barrancabermeja.<sup>10</sup> Además del fortalecimiento de la sociedad civil, esta iniciativa incluye un componente de desarrollo sostenible y cooperación con las instituciones estatales y organismos internacionales, combinación que hasta entonces había sido inexistente, si no impensable, en proyectos de intervención similares llevados a cabo por organizaciones no estatales. El programa es una confluencia subnacional de sectores de la sociedad civil, agencias del gobierno nacional, banca multilateral y organizaciones de cooperación internacional. Igualmente, es una experiencia piloto de democratización distinta al estatismo social, o a una solución de mercado sin otro tipo de mediación. Liderado por la comunidad de los jesuitas y la diócesis de Barrancabermeja, y con la estrecha participación de las comunidades locales agrupadas en una

<sup>10</sup> El PDPMM está ubicado en Barrancabermeja, eje de la industria petrolera estatal, de un sindicalismo militante, progresista e influyente, y centro de una de las regiones más afectada por la disputa armada.

“red de pobladores”, el PDPMM ha generado un espacio público *per se*, con la posibilidad de establecer como prioridad las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena medio en la agenda de desarrollo y paz. Los objetivos del PDPMM son cambiar lo que ellos denominan “dinámicas perversas” en el desarrollo regional y sentar las bases para la reconciliación política en el Magdalena medio (Romero, 1999: 64-71).

El PDPMM nació del interés mutuo de la empresa estatal de petróleo (Ecopetrol) y su sindicato, la Unión Sindical Obrera (USO), por llegar a un acuerdo sobre formas de seguridad para los oleoductos e instalaciones petroleras diferentes a la militarización. Los atentados de la guerrilla contra esa infraestructura estaban produciendo cuantiosas pérdidas económicas y daños ambientales considerables. Se acordó una inversión social en la región, hecho que sentó las bases del programa, el cual fue tomando una dinámica propia y cada vez de mayor envergadura y alcance.<sup>11</sup> Además, también se han incorporado profesionales y líderes de la región como funcionarios y asesores del PDPMM, y más importante aún, éste ha promovido la conformación de núcleos comunitarios en los 28 municipios en los que opera y, a partir de éstos, una red de pobladores del Magdalena medio. Esta red, aunque en proceso de consolidación, ha permitido la participación directa de grupos organizados en el ámbito local en la selección, diseño y planeación de los proyectos, hecho que se ha constituido en uno de sus mayores activos, junto con el del pluralismo político e ideológico. Al igual que con el Movimiento por la Vida, el PDPMM ha generado un espacio donde se oyen voces y propuestas alternativas, opuestas o coincidentes, según el caso, a las del gobierno, los partidos tradicionales o los actores armados.

Esa “voz propia” de los sectores marginados es lo que se conoce como un contrapúblico a la esfera oficial generada por el Estado y sus prácticas, sus proyectos y sus discursos, el cual no excluye las posibilidades de cooperación entre estos dos polos. Además, en el caso del Magdalena medio, ese espacio comunicativo y práctico creado por el PDPMM no sólo le disputa la creación de significados y de un marco de interpretación de los hechos a los diferentes niveles y organizaciones estatales, sino también a los grupos guerrilleros, por un lado, y a los paramilitares y autodefensas, por el otro. Se podría decir que cada acción y pronunciamiento del PDPMM pretende ser “una tacada a tres bandas”: hay por los menos tres audiencias diferentes que observan cuidadosamente su actividad.

<sup>11</sup> En el PDPMM han confluído el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y diferentes niveles, programas y agencias del Estado. Además, por la Iglesia católica han participado la diócesis de Barrancabermeja y el Cinep.

En efecto, la diversidad de voces, perspectivas e intereses que se ventilan en la red de comunicación y cooperación que constituye el PDPMM, la posibilidad de poner como prioridad en la agenda de desarrollo y paz las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena medio, y las reducidas posibilidades de corrupción en el manejo de los recursos, hechos difíciles de lograr en las instituciones estatales regionales manejadas por los dos partidos tradicionales, han convertido al PDPMM en una experiencia piloto para la superación de la pobreza y la construcción de la paz. Esta modalidad de asociación entre organismos de cooperación internacional, banca multilateral, agencias estatales y grupos de la sociedad civil, incluyendo a los sectores populares como sujetos portadores de derechos y no como clientelas, está a tono con las demandas internas de democratización y participación, y con las nuevas corrientes internacionales sobre desarrollo social. Éstas ya no centran toda la responsabilidad del desarrollo en el Estado, sino abogan por una interacción positiva entre Estado y sociedad civil, dos polos que antes se consideraban excluyentes, o al menos contradictorios (Montúfar, 1996: 11-23).

Al invocar la defensa de derechos universales como los derechos humanos, la convivencia y defensa de la vida, la satisfacción de necesidades básicas y otros puntos, el PDPMM ha vuelto a poner en la discusión regional la noción de "bien común o colectivo", sin confundirlo con el Estado, pero reconociendo la importancia de éste para su implantación y estabilización en un complejo de derechos sancionados por ley y respetados en la práctica. Esto también supone la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos que realizan las administraciones locales, que en muchos casos están "privatizadas" por las diferentes redes políticas, incluyendo las de los actores armados. De ahí que el control de las municipalidades, sobre todo cuando recauda recursos derivados de las regalías de la explotación de petróleo o gas, se haya convertido en uno de los puntos candentes de la disputa armada.

Una de las mayores dificultades del PDPMM es la gran desconfianza frente al Estado central y sus aliados locales en el Magdalena medio. La explotación de recursos naturales, como el petróleo y el gas, no ha tenido los efectos regionales esperados y prometidos, y la riqueza del subsuelo de esta zona no ha ofrecido progreso a su población debido al modelo de economía extractiva utilizado y a la ausencia de encadenamientos productivos sólidos con la región (De Roux, 1996). En esta situación de desconfianza, no sólo frente al Estado sino dentro de la misma sociedad, el trabajo del PDPMM ha sido difícil debido a esa ausencia de "capital social", definido como la capacidad para asociarse, para crear redes de solidaridad, confianza y reciprocidad, no sólo dentro y entre los miembros

de los diferentes grupos sociales, sino entre los potenciales ciudadanos y las distintas organizaciones estatales.

Esa capacidad para asociarse está relacionada con el desarrollo económico, y tiene mucho que ver con la sinergia entre el Estado y los grupos de la sociedad, de la cual el PDPMM es un resultado relativamente exitoso. Sin embargo, el escepticismo originado por el conflicto armado ha sido una barrera para la cooperación, y las perspectivas de su recrudecimiento, al convertirse la región, y la misma ciudad de Barrancabermeja, en un territorio en disputa entre guerrilla y paramilitares, demandarán una dosis mayor de optimismo y esfuerzo por parte del PDPMM. Con todo, lo obtenido hasta el momento ha demostrado los beneficios de esas nuevas posibilidades de asociación.

La movilización por la paz en Colombia ha tenido muchas facetas y múltiples actores durante los últimos 15 años. Éstos han fluctuado entre seguir interactuando estratégicamente para obtener ventajas en el conflicto o cooperar para innovar y aprender, y de paso, redefinir las divisiones de la sociedad civil heredadas del Frente Nacional y su desarrollo posterior. La confluencia de los cuatro factores mencionados al comienzo del trabajo ha facilitado esa cooperación y aprendizaje, y en este trabajo se ha tratado de mostrar la complejidad y diversidad de la movilización por la paz en Colombia. Si bien existen factores que impiden la formación de condiciones sociales para el fortalecimiento de barreras institucionales y culturales en contra de la violación de derechos, por fortuna las distintas movilizaciones por la paz de la última década en Colombia han sido un avance en la cooperación de los sectores afectados por la violencia para impulsar el respeto y el lenguaje de los derechos. Aunque sin duda, todavía falta mucho por hacer.

## BIBLIOGRAFÍA

- Arnsion, Cynthia (ed.), *Comparative Peace Processes in Latin America*, Washington, Woodrow Wilson Center Press, 1999.
- Bejarano, Jesús Antonio, "El papel de la sociedad civil en el proceso de paz", en Leal, 1999, s. p.
- Cinep, *Voces de paz. Propuestas de hombres y mujeres, Colombia 1994-1996*, Bogotá, Cinep, 1996.
- Guerrero, Arturo, "Para cargar un costal de anzuelos", en Mandato Ciudadano por la Paz, *Eclipse de la guerra*, Bogotá, UNICEF, 1998.
- Chevigny, Paul, *Edge of the Knife. Police Violence in the Americas*, Nueva York, The New Press, 1995.

- Comisión de Conciliación Nacional, Cruz Roja y Cambio 16, *La paz sobre la mesa*, Bogotá, s. d., 1998.
- De Roux, Francisco, *Documento central de diagnóstico, conclusiones y recomendaciones*, Bogotá, PDPMM, 1996.
- Fraser, Nancy, "Pensando de nuevo la esfera pública", en *Justicia interrumpida*, Bogotá, Uniandes, 1997.
- Leal, Francisco (ed.), *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*, Bogotá, TM y Universidad de los Andes, 1999.
- Montúfar, César, "Desarrollo social con sociedad civil. El espejismo de la participación en el nuevo discurso del desarrollo", *Controversia*, núm. 168, 1996.
- Pardo, Rafael, *De primera mano. Colombia 1986-1994: entre conflictos y esperanzas*, Bogotá, Cerec-Norma, 1996.
- Pécaut, Daniel, "Estrategias de paz en un contexto de diversidad de actores y factores de violencia", en Leal, 1999.
- Pontón, Amparo, "Semillas de paz", en Mandato Ciudadano por la Paz, *Eclipse de la guerra*, Bogotá, UNICEF, 1998.
- Ramírez, Augusto, "Diferencias entre procesos de paz centroamericanos y la situación colombiana", en *Lecciones de paz de Centroamérica para Colombia*, Bogotá, Plaza y Janés-Embajada de Estados Unidos en Colombia, 1999.
- Romero, Mauricio, "El programa de desarrollo y paz del Magdalena medio, PDPMM: desarrollo y paz en caliente", *Controversia*, núm. 174, 1999.
- , *El conflicto político en el Magdalena Medio*, inédito [1997].
- Sandoval, Luis, *¡Proceso de paz! Audacias-timideces-proyecciones*, Bogotá, Ismac-Redepaz-Programa por la Paz, 1999.
- , *Paz. Recrear la democracia desde la sociedad civil*, Bogotá, Ismac, 1998.
- Villarraga, Álvaro, "El Constituyente primario, factor decisivo para la paz", en Mandato Ciudadano por la Paz, *Eclipse de la guerra*, Bogotá, UNICEF, 1998.
- Zuluaga, Jaime, "La reforma política: ¿compromiso electoral, o urgencia nacional?", en Mandato Ciudadano por la Paz, *Conversaciones de paz. Redefinición del Estado*, Bogotá, Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, 1999.